



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2.022)

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Apelación auto: 05001 31 03 011 2011 00156 01

Proceso: Ejecutivo.
Auto: 110
Demandante: REINTEGRA S.A.S., cesionaria de BANCOLOMBIA S.A..
Demandado: GILBERTO ALONSO RESTREPO SIERRA.
Extracto: Ante la carga procesal pendiente hubo silencio de la actora, y como no se observa actuación que lo interrumpa, procede el desistimiento tácito. Confirma.

ASUNTO A TRATAR

Resuelve la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra el auto del primero (1º) de marzo de dos mil veintidós (2.022), proferido por el JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

ANTECEDENTES

Mediante el auto recurrido se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, argumentándose que la última actuación en este asunto fue el 11 de noviembre de 2.021, fecha en que se requirió a la actora para adelantar la diligencia de secuestro del vehículo de placas EWM-335, el que estaba embargado y aprehendido por la Secretaría de Movilidad de Medellín; sin embargo, tal carga procesal no se cumplió.

Frente a esa decisión la demandante presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, diciendo que su falta de ejecución obedece a que el Juzgado no ha cumplido con el auto del 31 de mayo de 2.012, el cual dispuso elaborar *“nuevamente el despacho comisorio para la realización de la diligencia de secuestro”*, orden que a la luz del Decreto 806 de 2.020 debió remitirse a su correo o al de la autoridad comisionada. Pidió reponer y continuar con el trámite.

En traslado la parte demandada guardó silencio.

En auto del 1° de julio de 2.022 se decidió no reponer, considerando que no tiene actuación pendiente pues desde el 18 de agosto de 2.011 expidió el Comisorio con miras al secuestro del vehículo de placas EWM-335, el que fue devuelto sin diligenciar por la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, por lo que en providencia del 31 de mayo de 2.012 requirió a la actora para que lo retirara nuevamente.

Iteró que el Comisorio fue debidamente expedido, y como fue regresado sin finalizar la diligencia, se puso a disposición de la demandante quien no mostró interés en retirarlo, donde si la recurrente necesitaba la expedición de otra orden, debió solicitarla, aunado que no aportó dirección de correo electrónico para la remisión.

Concedió la apelación subsidiariamente presentada, la que se procede a resolver tal como lo prevé el artículo 326 procesal civil, previas:

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación busca que el Superior Funcional estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, todo dentro del principio de la limitación que impone el artículo 328 ibidem¹.

En esos términos, se presenta el problema jurídico así: ¿se aviene al ordenamiento jurídico la decisión de terminar por desistimiento tácito el proceso en referencia?

En primer lugar, revisado el Expediente Digital correspondiente al caso que nos ocupa (en lo sucesivo E.D.), se constata que el 27 de abril de 2.011 se libró mandamiento de pago en contra de GILBERTO ALONSO RESTREPO SIERRA y ANDRÉS GUILLERMO JÍMENEZ AGUSTÍN, último del que la actora posteriormente desistió; y ese mismo día se decretó el embargo y secuestro del vehículo de placas EWM-335, propiedad de aquel, expidiéndose el oficio que comunicaba lo pertinente a la Secretaría de Transporte y Tránsito de Envigado, dependencia que el 8 de junio de igual año (2.011) informó:

“... se acató la medida judicial consistente en: Embargo - Ejecutivo con Título Prendario (100% de propiedad del demandado) y se inscribió en el Registro magnético automotor de la Secretaría De Transporte Y Tránsito de ENVIGADO ANTIOQUIA.” Ver folios 29-30, 33 y 51 del archivo “1.1” E.D.

El 22 de julio de 2.011 la actora deprecó el Despacho Comisorio para la práctica del secuestro, destacando que ese rodante circula en la ciudad de Medellín, por lo que el 18 de agosto también de 2.011, para tal diligencia se ordenó comisionar al “*INSPECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL DE MEDELLÍN — ANTIOQUIA*”, oficio retirado el 25 de agosto de 2.011 por la demandante (folios 55, 71-73 E.D.).

¹ Estamos ante un auto apelable tal como lo dispone el literal “e” numeral 2º del artículo 317 del C. G. del P..

El 8 de febrero de 2.012 se ordenó seguir adelante la ejecución únicamente frente a RESTREPO SIERRA; y ya en oficio del 2 de mayo de ese mismo año la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín informó lo siguiente:

“Por medio de la presente me permito remitirle el original del Despacho comisorio No. 091 fechado a 18 de agosto de 2011 relacionado con el secuestro del vehículo de placas EWM-335, ponemos a su disposición el vehículo mencionado, toda vez que éste despacho en repetidas ocasiones le ha enviado correo electrónico a la apoderada de la parte demandante Doctora María Enoe Correa Ramírez, sin éxito pues no ha pasado a notificarse a esta inspección de la captura del vehículo, para fijar fecha y hora de la diligencia, el vehículo está capturado desde el pasado 16 de marzo de 2012 y se encuentra retenido en el parqueadero I&T desde entonces.

“Así las cosas anexo: ficho del parqueadero I&T No. 0441, sin más documentos, pues el vehículo se encontraba sin conductor y sin documentos ya que se encontraba abandonado en la vía pública.” (folios 5-10 y 63 del archivo “1.2” E.D.

Lo anterior fue puesto en conocimiento de la actora, y en auto del 31 de mayo de 2.012 se le requirió para que retirara el Despacho Comisorio para lo pertinente (folio 71 archivo “1.2” E.D.). Sin actuaciones sobre el particular, el 24 de mayo de 2.018 se le instó para la diligencia de secuestro; el 3 de febrero de 2.020 y el 7 de abril de 2.021 se le hicieron requerimientos en los que se le advirtió del desistimiento tácito en los términos del artículo 317 procesal civil (ver folios 21 y 31 archivo “1.3” y folio 1 archivo “1.6” E.D.).

No obstante, las anteriores admoniciones no pueden ser consideradas como habilitantes para dispensar el desistimiento tácito que nos ocupa, pues del requerimiento del 31 de mayo de 2.012, si bien en su momento el artículo 346 del derogado C. de P. C. preveía la figura de la renuncia tácita, e incluso el requerimiento para que se cumpliera una carga procesal, también lo es que la actual codificación general del proceso, y en la que se sustenta la decisión, en lo que concierne al artículo 317, este solo empezó a regir el 1º de octubre de 2012, tal como lo contempló el artículo 627.4 de esta normatividad

En cuanto a los posteriores requerimientos (24 de mayo de 2.018, 3 de febrero de 2.020 y 7 de abril de 2.021), no son útiles para producir el efecto jurídico previsto en el artículo 317 en cita, en la medida que la actuación del 13 de octubre de 2021 en la que se sustituyó el poder - ver archivo 1.8-, validó las actuaciones, y al proferirse antes que cualquier decisión inherente al desistimiento tácito, constituye *“Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo”*, según lo prevé el literal “c” del citado artículo procesal civil².

Entonces, para resolver el asunto hemos de concentrarnos en el auto del 11 de noviembre de 2.021, el que en la parte correspondiente al requerimiento, se indicó:

“Como segunda medida, en autos anteriores: 24 de mayo del 2018, febrero 3 del 2020, abril 7 del 2021- archivo 1.6), se requirió a la parte demandante para que adelantara las gestiones necesarias con el fin de lograr la diligencia de secuestro del vehículo de placas EWM-335 de propiedad de Gilberto Alonso Restrepo Sierra.

“Tales requerimientos se hicieron en vista de que en folio 96 la Inspectora Gloria E. Noreña Muñetón, puso a disposición el vehículo de placas EWM-335, pues la parte demandante no pasó

² En precedente horizontal del 18 de octubre hogano, en el expediente 05266 31 03 003 2021 00321 01, se indicó: *“... Así, a manera de problema jurídico, surge el siguiente interrogante; ¿previo al decreto de la terminación anormal del proceso dispuesta el 26 de mayo de 2.022, existió actuación de parte que interrumpiera los términos conforme el literal “C”, numeral 2º del artículo 317 procesal civil?... Para la Sala la respuesta es afirmativa considerando los siguientes elementos procesales: ... En lo anterior se evidencia, en primer lugar, el interés de la ejecutante en la actuación por la que, en últimas, se le aplica la terminación anormal; y segundo, los actos procesales que, independientemente de su naturaleza, satisfacen el requerimiento previsto en el literal “C”, del artículo 317 procesal civil, pues tienen la característica de “cualquier actuación”, siendo útiles para interrumpir el término del desistimiento, pues fueron anteriores a la decisión jurisdiccional, y con ellas se obstaculizó el plazo previsto en el artículo de marras, argumento con el cual se revocará la decisión apelada... Debe recordarse que del artículo 230 Constitucional, “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.”, y si la Ley dice con claridad que “cualquier” actuación interrumpe los términos previstos para el decreto de la terminación anormal, el intérprete no puede generar otro tipo de lecturas que en últimas restringen el acceso a la administración de justicia.”.*

a notificarse de la captura de dicho rodante, después de haberlo solicitado a través de correo electrónico. Dicho bien fue capturado desde marzo del 2012 y retenido en parqueadero I & T No. 0441

“En consecuencia, se reitera por última vez y sin lugar a más dilaciones, que para continuar con el trámite del proceso, es necesario que la parte demandante en el término perentorio de treinta (30) días siguientes a la notificación del presente auto, conforme al artículo 317 (numeral 2 –b-) realice las gestiones necesarias para lograr la diligencia de secuestro del vehículo dado en prenda de placas EWM-335 de propiedad del único demandado GILBERTO ALONSO RESTREPO SIERRA.

“Vencido el término indicado, sin que la parte realice lo ordenado, se terminará el proceso por desistimiento tácito, se ordenará el levantamiento de la medida cautelar y no habrá condena costas.”

Nótese que el párrafo penúltimo de la anterior cita, en el entre paréntesis se soporta el requerimiento según el numeral 2º literal “b” del artículo 317 del C. G. de. P., pero resulta que tal numeral no prevé la necesidad que se realice requerimiento como tal, sino, que exista abandono del trámite, o inactividad llama la norma, específicamente “*el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio...*”, término que se duplicará si existe orden de seguir adelante la ejecución según el literal “b” del artículo en cita, decisión ejecutiva que en efecto concurre en las presentes (ver archivo 1.2 folios 5-10 actuaciones primera instancia).

En esos términos, es decir, en aplicación del numeral 2º del artículo 317 del C. G. de. P., no era menester realizar requerimiento alguno, pues bastaba la dejadez de cara al trámite durante el correspondiente lapso temporal, en este caso dos años.

Entonces, ante el requerimiento el supuesto para resolver el asunto es el numeral 1º del artículo 317 procesal civil, regla que reza:

“1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

“Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

“El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas.”.
Subrayado extra texto.

¿Qué debe entenderse en el anterior contexto normativo y de cara al caso como “*actuación promovida a instancia de parte*”?

Como lo indica el artículo 28 del C.C., las palabras “*de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio*”, donde en este caso la actuación en últimas suscitada es la almoneda judicial, en la que se busca satisfacer lo que es objeto de recaudo³; entonces, si el funcionario cumpliendo sus funciones de impulsión procesal (inciso 2º artículo 8º y artículo 42.1, ambos del C. G. del P.), insta a las partes para realizar el fin del proceso ejecutivo, es asunto que se aviene al numeral 1º del artículo 317 en cita.

Así, a pesar del requerimiento en cita, el cual tiene el mencionado soporte legal, posterior al mismo la actora no desplegó gestión alguna en procura de su cumplimiento; y contrario a lo expuesto vía alzada, no había actuaciones pendientes del *a quo*, por cuanto del párrafo del artículo 595 procesal civil, “... *Cuando se trate del secuestro de vehículos automotores, el juez comisionará al respectivo inspector de tránsito para que realice la aprehensión y el secuestro del bien.*”.

³ Valga anotar que de cara al remate, es imprescindible que los bienes “se hayan embargado, secuestrado y avaluado”, tal como lo dispone el inciso 1º del artículo 448 del C. G. del P..

cuestión que se hizo, por lo que la carga procesal a cargo de la actora no se agotaba con el retiro del referido Despacho Comisorio y su comunicación, inserto este del que conoce la autoridad de tránsito, pues el objeto de la cautela está aprehendido, y el requerimiento es por el secuestro del bien el cual se encuentra retenido en parqueadero, lo que se dejó en claro desde el 16 de marzo de 2.012.

Valga anotar que revisado el auto del 31 de mayo de 2012, contrario a lo indicado vía alzada, en él no se dispuso que se elaborara un nuevo Despacho Comisorio para la realización de la diligencia de secuestro, si no que se dio traslado de la nota devolutiva de este proveniente de la autoridad de tránsito a fin que la actora lo retirara y “*realice lo pertinente*” -sic- (ver folio 71 archivo 1.2 expediente digital).

Se resalta que mediante auto del 18 de agosto de 2.011 se nombró secuestre; sin embargo, la actora ha descuidado el particular, incluso ella contaba con la opción de recibir el automotor “*en depósito*” en los términos del inciso 2° del numeral 6° del artículo 695 procesal civil, pese a ello su conducta ha sido apática respecto a la diligencia pendiente.

De lo anterior se concluye que la inactividad censurada es atribuible exclusivamente a la demandante, quien no solicitó la expedición de otro Despacho Comisorio, ni ejerció o solicitó ningún otro acto procesal que fuera útil para interrumpir los términos previstos en el mentado artículo 317 procesal civil.

Finalmente, si bien existía la posibilidad que el Juzgado de conocimiento remitiera el comisorio mencionado vía correo electrónico, ello no se le solicitó, de ahí que fue adecuado aplicar la consecuencia procesal inherente al desistimiento tácito.

Sin condena en costas conforme al artículo 365.8 del C. G. del P..

Por lo expuesto, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del primero (1º) de marzo de dos mil veintidós (2.022), proferido por el JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín, según lo motivado.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen. Sin costas.

Notifíquese;



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO